

Hacer viable un gobierno abierto

La profunda crisis de desconfianza en la gestión pública continúa en aumento y está provocando una preocupante y peligrosa desconexión entre la sociedad y las instituciones públicas que pone en riesgo la cohesión social y debilita las posibilidades de adelantar la recuperación del País. El hecho de que los ciudadanos no confíen en sus instituciones, ni en quienes están al frente de estas, complica las posibilidades de gobernabilidad del País y debilita la democracia.

El cuestionamiento más reciente del manejo del caso judicial del destituido presidente de la Comisión Estatal de Elecciones por parte de las agencias a cargo del sistema de justicia e integridad pública y la Legislatura vuelve a poner de manifiesto las debilidades de las capacidades institucionales que viene enfrentando el País por décadas, lo que ha empobrecido la prestación de los servicios públicos. Resulta penoso que la aparente causa real de estas disputas se deba a instancias de conflicto engendradas por razones de índole política. Una vez más la partidocracia, el inversionismo político y los escándalos de corrupción continúan obstaculizando que se adelante

una agenda pública clara y coherente para encaminar las reformas apremiantes que necesita el País y ha generado conflictos, cinismo y escepticismo. Ambos hechos llevan a una clara erosión de la confianza de los ciudadanos en las principales instituciones del Estado, lo que produce crisis de confianza generalizada e incertidumbre que puede acarrear efectos nocivos para la democracia y la gobernabilidad.



**Dra. Eneida
Torres
de Durand**

Directora
Ejecutiva Centro
de Gobernanza
Pública y
Corporativa

Para que los ciudadanos recuperen la confianza en su gobierno es impostergable construir instituciones más abiertas, más confiables, más transparentes, más eficientes y eficaces, así como luchar contra la corrupción, prestar mejores servicios y responder adecuadamente a las demandas y aspiraciones de los ciudadanos. De igual forma, para atender las debilidades institucionales urge adoptar un nuevo modelo de gobierno abierto y transparente en el cual de un lado el ciudadano tiene un rol mucho más activo y colabora con el gobierno en la elaboración de políticas públicas, la solución de problemas y la generación de valor público. Por su parte, el gobierno tiene el deber de rendir cuentas de manera abierta al público generando nuevas oportunidades de

colaboración, mejorando los resultados y construyendo mayor confianza.

Restituir la confianza de las instituciones es un imperativo categórico para encaminar la prosperidad del País y la salud de la democracia. Esto va a requerir resolver la disfuncionalidad institucional que enfrentan las entidades gubernamentales y los partidos políticos en nuestro país. Estas instituciones han dejado de ser cauce de soluciones y se han convertido en fuente de problemas. El papel privilegiado que han ocupado las instituciones políticas en nuestra sociedad les ha permitido, a nombre de la democracia, alterar todo el entramado institucional en beneficio de intereses particulares o del partido político. La falta de democracia interna y de transparencia externa es evidente. Además, se requiere que estas instituciones se replanteen cuál es su responsabilidad en la sociedad y revisen las malas prácticas que tanto daño le han hecho a la administración pública.

En términos generales, podemos afirmar que la pérdida de gobernabilidad que vivimos se debe al propio deterioro institucional. Este deterioro se explica entre otras razones por: (1) una baja preocupación por los asuntos públicos colectivos, por lo que las entidades públicas trabajan con una mirada focalizada por el interés propio, dejando a un lado su pertinencia para lograr

resultados a nivel de país; (2) una planificación desarticulada entre los niveles del Estado y las municipalidades, a pesar de que se pretende hacer creer a los ciudadanos que existe un plan de país; (3) protagonismos individuales e institucionales que se manifiestan en acciones individualistas que ejercen algunos funcionarios sobre la direccionalidad de políticas y estrategias institucionales; (4) el interés por adelantar agendas del partido político por sobre el interés público; (5) deterioro de las capacidades institucionales debido a los altos niveles de corrupción y baja capacidad directiva y técnica para ejercer las competencias organizativas que le delega su ley orgánica.

Lo que se observa es un decaimiento de la capacidad institucional donde no se percibe claridad y continuidad en la formulación e implantación de las políticas públicas; es decir, las reglas de juego no son claras y contribuyen al deterioro político con altos índices de corrupción y de ingobernabilidad de la sociedad. Para atender esta situación es necesario revertir el desgaste institucional mediante el fortalecimiento de la transparencia y las estrategias de gobierno abierto y fortalecer las capacidades institucionales. Urge atender el deterioro de nuestras instituciones para encaminar la prosperidad y propiciar el bien común de la sociedad.